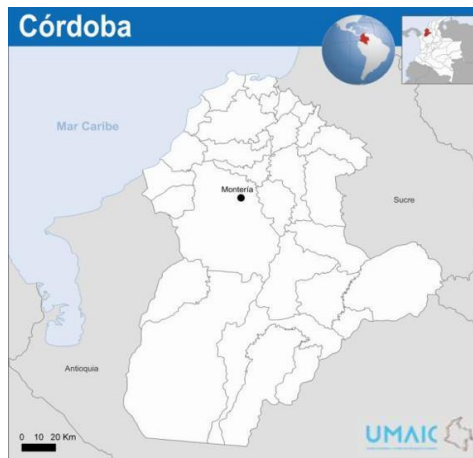


## CÓRDOBA | Diciembre 2018

| DATOS DEPARTAMENTALES           |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Gobernadora (e)                 |  | Sandra Devia Ruiz   |
| Datos Demográfico               | Población  | Total población: 1.788.507 (2018)<br>Cabecera: 950.107 (53,1%); Rural: 838.400 (47,9%)<br>Hombres: 895.517 (50,1%); Mujeres: 892.990 (49,9%) <sup>1</sup><br>Grupos étnicos: Negro (a), Mulato, Afrocolombiano: 191.797 (13,1%); Indígena: 151.064 (10,3%) <sup>2</sup> |
|                                 | Desplazamiento Forzado - Expulsión   | Total: 385.373 (1985-2018); 4.815 (2018) <sup>3</sup><br>Masivos: 8.529 (2009-2018); 313 (2016); 733 (2017); 557 (2018) <sup>4</sup>  |
| Datos Humanitarios <sup>2</sup> | Víctimas de Accidentes MAP/MUSE  | Histórico (1990-2018): 273 (35% civiles/ 65% fuerza pública; 94% hombres/4% niños/ 1% mujeres/1% niñas; 3% indígenas/97% otros)<br>2016: 1 (civil); 2017: 0; 2018: 3 (civiles) <sup>5</sup>   |
|                                 | Restricciones al acceso y limitaciones a la movilidad y confinamiento por violencia armada | N° de afectados: 1.439.292 (2012-2018); 1.133.137 (2016); 14.073 (2017); 5.180 (2018)<br>Confinamiento-N° de afectados: 0 (2014-2018) <sup>4</sup>  |
|                                 | Desastres Naturales  | N° de afectados: 397.826 (2012-2018); 14.227 (2016); 141.545 (2017); 22.631 (2018) <sup>6</sup>   |
|                                 | Homicidios contra civiles  | N° de eventos: 83 (2012-2018); 9 (2016); 18 (2017); 29 (2018) <sup>4</sup>  |
|                                 | Amenazas   | N° de eventos: 220 (2012-2018); 52 (2016); 31 (2017); 30 (2018) <sup>4</sup>  |
|                                 | Ataques contra la población civil  | N° de eventos: 422 (2012-2018); 39 (2016); 67 (2017); 48 (2018) <sup>4</sup>  |
|                                 | Acciones Armadas   | N° de eventos: 127 (2012-2018); 67 (2016); 57 (2017); 74 (2018) <sup>4</sup>  |



El departamento de Córdoba, con capital en Montería, está ubicado en la zona noroeste de Colombia. Limita al norte con el mar Caribe y el departamento de Sucre; al oeste con el mar Caribe y el departamento de Antioquia; al este con los departamentos de Bolívar, Sucre y Antioquia y al sur con el departamento de Antioquia. Tiene una extensión de 23.980 kilómetros distribuidos en 30 municipios.

### MENSAJES CLAVES

- El departamento de Córdoba presenta diferentes situaciones humanitarias relacionadas con el conflicto armado y con la violencia generalizada que afectan a la población civil, tales como: limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso de bienes y servicios, amenazas y homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos, control social y violencia sexual basada en género (VBG). Actualmente, la dinámica de la violencia armada en la región se atribuye al conflicto territorial de los Grupos Armados Organizados (GAO) sobre los corredores estratégicos, a través de las prácticas de economías ilícitas, entre ellas la minería ilegal, principalmente en los lugares que dejaron las FARC-EP, luego de su proceso de agrupamiento y desmovilización en el marco del Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional.
- Las consecuencias humanitarias de la violencia armada en el departamento se evidencian en las víctimas por accidentes con explosivos, restricciones a la movilidad, confinamiento y desplazamiento forzado individual y masivo, además del reclutamiento, utilización y vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA), como también el uso, explotación sexual y laboral de NNA en actividades relacionadas con el conflicto. Aunque se han evidenciado disminuciones considerables en el número de víctimas, se mantienen riesgos y vacíos en el goce efectivo de derechos que requieren de garantías de protección y respuesta por parte del Estado.
- Las amenazas y violencia contra líderes y lideresas sociales, de procesos de restitución de tierras, defensores de derechos humanos y sus familiares, son una de las mayores preocupaciones. El sur de Córdoba es escenario de grandes proyectos extractivos e incremento de los cultivos ilícitos, factores que han contribuido a una mayor militarización de la zona, causante de confrontaciones armadas y ataques a la población civil, en particular, en la subregión del Nudo del Paramillo, siendo la población indígena Embera Katío uno de los grupos poblacionales con mayor impacto.
- Los líderes sociales han sido unos de los más afectados por el incremento de la violencia que atraviesa la subregión del San Jorge en el departamento, el cual ocupa el primer lugar en homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Caribe, según la Defensoría del Pueblo (desde el 01 de enero del 2016 al 22 de agosto de 2018 se han registrado un total de 13 asesinatos en el departamento<sup>7</sup>

<sup>1</sup> DANE - Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 Nacional, Departamental y Municipal por sexo, grupos quinquenales de edad.

<sup>2</sup> TERRIDATA - Distribución de población por grupo étnico 2005

<sup>3</sup> UARIV - Reporte de personas desplazadas por año. Fecha de corte: 01 enero 2019

<sup>4</sup> Monitor OCHA/UMAIC. Fecha de corte: 31 diciembre 2018; fecha de reporte: 09 enero 2019

<sup>5</sup> DAICMA/Descontamina Colombia - Base de datos de víctimas. Fecha de corte: 31 diciembre 2018, fecha de reporte: 15 enero 2019

<sup>6</sup> UNGRD - Consolidados de atención de emergencias 2012-2017 y Reporte de Atención a Emergencias 2018. Fecha de corte: 31 diciembre 2018, fecha de reporte: 14 enero 2019

<sup>7</sup> <http://www.defensoria.gov.co/es/publicacion/contenido/7399/Homicidios-de-%C3%ADderes-sociales-y-defensores-de-DDHH.htm>

- Los municipios de la zona costanera y del Bajo Sinú presentan diferentes problemáticas asociadas a la violencia armada que afectan a la sociedad civil, entre ellas limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso de bienes y servicios en horarios específicos, control social y violencia sexual basada en género. Estas afectaciones son producto del accionar de los GAO que operan en esta subregión, en el desarrollo de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, aunque con menos visibilidad que en otras zonas. Estos hechos agudizan la vulnerabilidad de la población al conjugarse con las necesidades en materia de salud, agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y nutrición.

## I. CONTEXTO Y RETOS HUMANITARIOS

1. **Desplazamiento Forzado.** Según datos del Registro Único de Víctimas (RUV), en 2018 se desplazaron al menos 4.815 personas, lo cual representa una disminución del 311% respecto al total de desplazados en 2017<sup>42</sup>. La disminución, si bien la reducción en parte es el resultado del subregistro de este hecho victimizante, también refleja la baja intensidad del conflicto. Enfrentamientos entre GAOs y la fuerza pública, homicidios selectivos y otros ataques contra la población civil, han sido las principales causas de estos hechos. En la región son comunes los desplazamientos interveredales e individuales, tanto en comunidades campesinas como en las comunidades indígenas zenúes y embera katóis; sin embargo, en la mayoría de los casos estos eventos no se denuncian por temor a represalias de los grupos armados. Las autoridades locales han manifestado su débil capacidad para la atención inmediata en caso de presentarse una emergencia. Así mismo, las autoridades de los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador (sur de Córdoba) han manifestado que existen limitaciones de acceso para las instituciones estatales por el entorno físico, los recursos limitados y las condiciones de seguridad. El municipio de San José de Uré fue el que registró emergencias masivas y mantiene la alerta por posibles nuevos desplazamientos, motivados por los constantes combates entre Los Caparrapos y el Clan de Golfo.

2. **Restricciones al acceso y confinamiento.** Se han identificado situaciones crónicas que afectan en particular a las poblaciones de los municipios del sur del departamento y la zona costanera. Según información y análisis del ELC en el transcurso del año, la población indígena ha visto limitada su movilidad por el riesgo de contaminación por minas antipersonal, presencia permanente de GAPD, que intimidan e imponen limitaciones de movimiento a la población y al acceso de bienes e insumos en horarios específicos. Estas situaciones afectan significativamente la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades y, además, causan retrasos en la operación humanitaria. En 2016 un paro armado decretado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia restringió las operaciones humanitarias, al igual que la movilidad y acceso a bienes servicios, y asistencia de al menos 1.133.137 personas en el departamento. Aunque la afectación fue por poco tiempo, se presentó temor generalizado en la población y, en consecuencia, una afectación de casi la totalidad del departamento, incluida la capital Montería. Durante 2017 aumentó la interferencia a las organizaciones humanitarias<sup>43</sup>. El día 10 de septiembre del 2018 se emitió una Alerta Temprana por parte de la Defensoría del Pueblo en la que se manifiesta la grave situación de riesgo que afrontan los habitantes de San José de Uré tanto en zona urbana como rural allí hay un riesgo inminente de confinamiento por los continuos enfrentamientos entre los GAO de Los Caparrapos y el Clan del Golfo.

3. **Minas Antipersonal (MAP) y Munición Sin Explotar (MUSE).** A pesar de que en año 2017 no se reportaron víctimas por minas antipersona, en 2018 Córdoba registró 3 víctimas por estos eventos. Tierralta concentra el 47% de todas las víctimas desde 1994<sup>45</sup>; este indicador prevé riesgos de protección para la población que habita territorios contaminados con estos artefactos, y son la causa de restricciones a la movilidad y acceso de comunidades en la zona rural. Aunque los accidentes disminuyeron, en parte por las restricciones autoimpuestas como mecanismo de protección, existe el riesgo principalmente en la comunidad indígena Embera Katío del Alto Sinú, ubicada en zona rural del municipio de Tierralta, que ha sido una de las más afectadas por la presencia de explosivos para pescar, sembrar o cazar, lo cual pone en riesgo su seguridad física y el acceso a fuentes de alimentos y medios de vida<sup>46</sup>. Por otra parte, en Córdoba el municipio de Ciénaga de Oro ha sido asignado para ser intervenido como zona de desminado humanitario<sup>47</sup>. En abril de 2018 el municipio de Valencia fue declarado el primer municipio de Córdoba libre de minas antipersonal<sup>8</sup>.

4. **Niños, Niñas y Jóvenes en conflicto armado.** De acuerdo con información del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en algunos municipios del sur de Córdoba, especialmente, Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta y Valencia (Sur de Córdoba), los GAO reclutan y utilizan a niños, niñas y adolescentes (NNA), e incurrir en el delito de trata de personas. Este fenómeno es difícil de cuantificar, pues no existen estadísticas oficiales, hay subregistro por la falta de denuncia y solo se manifiesta cuando los NNA se desvinculan de los grupos. En el departamento existen otros factores estructurales que propician esta problemática y requieren atención en términos de protección; las dificultades para ingresar o permanecer en el sistema educativo y la ausencia y/o baja permanencia de profesores, limitan el acceso a servicios y oportunidades laborales y genera una mayor participación en el trabajo a temprana edad en las economías ilícitas, como apoyo para el sustento de cada núcleo familiar.

5. **Mujeres y Niñas ante la discriminación y Violencia Basada en Género (VBG).** En el departamento se evidencian diferentes riesgos que afectan de manera particular a las mujeres de la zona rural y urbana. Según el Boletín Epidemiológico de Información Estadística “Violencia de Género en Colombia”, presentado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), en 2016, 13 mujeres fueron víctimas de homicidio, 387 víctimas de violencia sexual y 395 víctimas de violencia intrafamiliar en el departamento. Para el año 2017 el total de casos de violencia de género en Córdoba fue de 2.373<sup>9</sup>. El subregistro es elevado por el temor a denunciar al agresor ante posibles represalias. En las zonas rurales, especialmente donde existe presencia de actores armados, las niñas y mujeres tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia y abuso sexual. La falta de servicios y presencia institucional en varias de estas zonas limitan el acceso a rutas de denuncia y atención, así como a sistemas de protección. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los

<sup>8</sup> <https://larazon.co/2018/04/valencia-primer-municipio-de-cordoba-en-ser-declarado-libre-de-minas-antipersonal/>

<sup>9</sup> Informe Sala situacional Mujeres víctimas de violencia de género. Ministerio de Salud y protección social. 2018.

municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador presentan un alto riesgo de ocurrencia de casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Hay alarma en el departamento por el aumento de las cifras de violencia contra la mujer, el número de casos hasta junio del 2018 supera en tres casos el total de hechos presentados en todo el 2017. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para ese mismo mes se habían atendido 954 casos de agresiones a menores mujeres en el departamento. Las cifras de violencia intrafamiliar también van en aumento, según la Policía para junio del 2018 se habían presentado 343 casos solo en Montería.

**6. Comunidades étnicas.** La población indígena de Córdoba representa el 10,3% del total de la población, destacándose las etnias Emberá y Zenú agrupadas en tres resguardos legalmente constituidos. Por otra parte, el 13,2% de la población en el departamento corresponde a afrocolombianos, concentrados en su mayoría en el municipio de San José de Uré<sup>10</sup>. En años anteriores, el 54% de las personas desplazadas en eventos masivos pertenecían a estas comunidades<sup>11</sup>. La mayoría de las comunidades indígenas carecen de titulación de tierras, lo que limita el desarrollo de sus actividades agrícolas para el sustento diario. En estas comunidades<sup>12</sup> se evidencia situación de vulnerabilidad con necesidades y vacíos en protección, así como afectación en los sectores de seguridad alimentaria, salud, medios de vida y educación. Existe un alto nivel de necesidades humanitarias de índole multisectorial agravadas por la dificultad en la generación y permanencia de los ingresos de las familias, así como cambios en las costumbres ancestrales derivados de la presencia de actores armados en su territorio, acentuando los riesgos en protección al no poder acceder efectivamente a una respuesta a sus necesidades.

**7. Desastres naturales.** Según cifras reportadas por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), entre enero y diciembre de 2018 resultaron afectadas 25.279 personas por desastres naturales, de los cuales el 89% corresponde a afectación por inundaciones. El departamento es propenso a inundaciones y temporadas de sequía cíclicas dependiendo del período del año. Se configura una doble afectación cuando estos eventos se dan en comunidades también impactadas por el conflicto armado. A pesar de la previsibilidad, son recurrentes las afectaciones en el Bajo y Medio Sinú, así como en la zona costanera y el sur del departamento señalando la necesidad de acciones efectivas de preparación, prevención y puesta en marcha de planes de contingencia, además de la atención oportuna a las emergencias. En temporadas de sequía existen vacíos en términos de información y articulación a nivel local y nacional, lo que dificulta la respuesta debido a que los eventos reportados en el departamento no se reflejan en las cifras oficiales a nivel nacional. Esta situación, también se ve reflejada en las comunidades indígenas que sufren afectaciones y generalmente no reciben la atención con enfoque diferencial. En 2018 fueron varias las emergencias por las fuertes lluvias acompañadas de fuertes vientos lo que provocó destrucción de viviendas y cultivos (plátano, yuca y ñame), varias vías de acceso se averiaron por lo mismo, un puente en Ayapel colapsó y dejó incomunicada a la población; en Montería los canales de aguas han colapsado por la cantidad de basura acumulada, causando inundaciones en zona urbana. Se presentó alerta en siete municipios por las fuertes lluvias y en uno de ellos por tormentas eléctricas impactando las telecomunicaciones, estos municipios son Moñitos, Chinú, San Andrés de Sotavento, Ciénaga de Oro, Cotorra, Sahagún y San Pelayo<sup>13</sup>.

## II. RESPUESTA

### 1. FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN DEPARTAMENTO

| FINANCIAMIENTO EN CÓRDOBA <sup>53</sup> |           |                        |            |                       |                          |   |   |
|---|-----------|------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|---|---|
| HUMANITARIO                             | AÑO       | MONTO TOTAL ADJUDICADO |            |                       | BENEFICIARIOS TOTALES    | Sectores con mayor financiación                     |   |
|   |           | CERF                   | CBPF       | Otros Donantes        |                          |   |   |
|   | 2017      | -                      | -          | 4.309.707             | 4.309.707                | 23.889  | 1. Recuperación Temprana<br>2. SAN<br>3. Protección |
| 2018                                    | -         | -                      | 3.558.653  | 3.558.653             | 23.376                   | 1. Recuperación Temprana<br>2. SAN<br>3. Protección |   |
| Paz y Desarrollo <sup>54</sup>          | AÑO       | MONTO TOTAL ADJUDICADO |            | BENEFICIARIOS TOTALES |                          | Temas con mayor financiación                        |   |
|   |           | PAZ                    | DESARROLLO | PAZ                   | DESARROLLO               | PAZ   | DESARROLLO  |
|   | 2017      | 4.246.339              | 3.371.325  | 16.583                | 14.095                   | Derechos de las víctimas                            | Sostenibilidad ambiental                            |
| 2018                                    | 7.713.641 | 3.780.788              | 14.533     | 18.616                | Derechos de las víctimas | Sostenibilidad ambiental                            |   |

Nota: Total entre paz desarrollo y humanitario no se deben sumar, dado que un proyecto puede caer entre ambos marcos.

<sup>10</sup> Plan de Desarrollo departamental Córdoba [http://www.cordoba.gov.co/descargas/plan\\_desarrollo\\_2016/Plan-Desarrollo-2016-2019-Unidos-Cordoba.pdf](http://www.cordoba.gov.co/descargas/plan_desarrollo_2016/Plan-Desarrollo-2016-2019-Unidos-Cordoba.pdf)

<sup>11</sup> Desplazamientos masivos 2012 – 2016. Estimado OCHA a partir de fuentes oficiales y secundarias.

<sup>12</sup> <https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/assessment/infome-final-mira-comunidades-ind%C3%ADgenas-embera-kat%C3%ADdo-del-alto-sin%C3%BA>

<sup>13</sup> [http://caracol.com.co/emisora/2018/09/27/monteria/1538060151\\_437136.html](http://caracol.com.co/emisora/2018/09/27/monteria/1538060151_437136.html)

### III. COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC) CÓRDOBA

El ELC Córdoba actualmente se encuentra conformado por 19 organizaciones internacionales (siete agencias del SNU, siete ONG internacionales y cinco observadores). Participan como invitadas ocho ONG nacionales y dos instituciones del estado (UARIV y SAT de la Defensoría del Pueblo). El ELC actúa de manera complementaria a los esfuerzos que realizan las instituciones estatales en términos humanitarios, de construcción de paz y desarrollo, a través del intercambio y análisis regular de información, así como la articulación de acciones para promover intervenciones interagenciales, multisectoriales, integrales y coordinadas, con enfoque de protección, de género y de soluciones duraderas. A través del diálogo permanente con las instituciones locales, especialmente la UARIV y el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, se busca potenciar las capacidades institucionales y comunitarias, impulsando las acciones de Recuperación Temprana con el fin de reducir las vulnerabilidades y generar procesos autosostenibles. *El liderazgo humanitario está a cargo de PMA y el liderazgo de desarrollo y construcción de paz está a cargo del PNUD, con apoyo del Gestor de información UMAIC para el abordaje de las diferentes temáticas.*

#### 1. Presencia operativa del Equipo Local de Coordinación de CÓRDOBA

##### COORDINACIÓN

| HUMANITARIO  | Albergue | Agua, saneamiento e higiene                 | Seguridad alimentaria y nutrición                | Salud   | Protección   | Educación                                   | Recuperación Temprana           |
|--|----------|---|--|---|--|---|---------------------------------|
|  | CRC      | ACH, BENPOSTA, FUNDACIÓN SAHED, TDH, CORSOC | PMA, FAO, ACH, BENPOSTA, FUNDACIÓN SAHED, CORSOC | CRC, TDH, ACH   | TDH, BENPOSTA, MAPP-OEA, ONU DDHH, OIM, PNUD, LA CID | TDH, BENPOSTA, WORLD VISION, CORSOC, LA CID | PNUD, FAO, PMA, FUNDACIÓN SAHED |
| PAZ  |          |   |  | DESARROLLO  |  |   |                                 |
| PNUD, CORDUPAZ, CORSOC, PASTORAL SOCIAL MONTELÍBANO, PASTORAL SOCIAL MONTERÍA, FUNDACIÓN DEL SINÚ, BENPOSTA, OIM, FUNDACIÓN SAHED, TDH, MPDL, PDH USAID. |          |   |  | PNUD, FAO, PMA, GIZ, BENPOSTA, CORDUPAZ, CORSOC, FUNDACIÓN DEL SINÚ, CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, FUNDACIÓN SAHED, FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN. |  |   |                                 |

Para mayor información sobre este producto, contacte a:  
ELC Córdoba ([cordoba@umaic.org](mailto:cordoba@umaic.org))  
Dirección: Carrera 15 N° 27 – 08, Barrio Costa de Oro, Montería - Córdoba  
Teléfono: +57 4 7892859 Correo